

# oligarquía, nacionalismo y alianza de clases en México

JORGE BASURTO

A *Grosso modo*, podría situarse el inicio de la historia moderna de México hacia comienzos del segundo tercio del siglo XIX, cuando empieza a configurarse una nueva estructura de clases por la emergencia de una incipiente burguesía industrial y, por ende, de un proletariado. No es intención de este trabajo discutir sobre la naturaleza de las relaciones de clase, pero sí afirmar que a partir de entonces, la aparición paulatina de asociaciones de trabajadores —unas más congruentes que otras, pero todas planteando a su manera la lucha de clases—<sup>1</sup> parece confirmar la aseveración anterior.

Ahora bien, no obstante el decidido impulso que el régimen de Porfirio Díaz dio a la industria, el desarrollo de la burguesía fue más bien lento. La estructura social está, pues, dominada por la presencia de un sector que detenta lo que en esos momentos constituye la principal riqueza del país: la tierra. Es el sector latifundista heredado en parte de la colonia, pero que procede también, en proporción no despreciable, de las reformas juaristas y de los deslindes y despojos a los campesinos durante el porfiriato.

Constituye una reducida capa de la población (1 por ciento) que, a más de poseer la casi totalidad de la tierra (97 por ciento a finales del periodo que nos ocupa), tiene estrechas ligas con el aparato gubernamental, lo que le permite ejercer una influencia decisiva sobre él. No sólo se trata de los famosos compadrazgos con prominentes hombres del régimen, sino que en muchas ocasiones los mismos terratenientes detentan los cargos públicos, como en el célebre caso de Luis Terrazas que además de ser el propietario prácticamente de todo el estado de Chihuahua —el más extenso del país—, es a la vez su gobernador;<sup>2</sup> el propio Venustiano

Carranza, gran terrateniente en Coahuila, es varias veces senador durante el régimen de Porfirio Díaz, y finalmente gobernador de su estado.

Es claro que no todos los terratenientes del siglo pasado pueden ser clasificados llanamente como latifundistas, si atendemos al grado y a la manera de explotar sus tierras. Una parte de ellos efectúa la explotación de sus propiedades en forma más o menos racional e intensiva, destinando gran parte de sus productos a la exportación; otros, por el contrario, mantienen improductivas grandes extensiones y cultivan el resto de sus tierras en forma extensiva. Existe, finalmente, el sector de terratenientes extranjeros que por lo general forman parte del primer grupo.

Sin embargo, para nuestro propósito, la generalización de los primeros párrafos es suficiente puesto que nos interesa más recalcar el hecho de que, independientemente de la parte de poder político que detentaba cada una de esas fracciones de terratenientes, es cierto que todos ellos se beneficiaban de la situación existente, pues durante la Reforma, se les permitía despojar a las comunidades indígenas; más tarde a los pequeños cultivadores —y así emplearlos como asalariados—,<sup>3</sup> o bien, mediante sus nexos con el gobierno, les era posible mantener la existencia de las relaciones paternalistas-autoritarias de explotación: endeudamiento de por vida, transmisión de las deudas de padres a hijos, tiendas de raya, etcétera.

Asimismo, nos importa hacer hincapié en que existen estrechos vínculos entre este sector detentador del poder económico y el también reducido círculo de gobernantes; esto es, la oligarquía, y que, como resultado de tales contactos, dicho sector ejerce una decidida influencia sobre el gobierno y le dicta, de hecho, la política a seguir, tanto en el orden económico como en el social.

<sup>1</sup> Cfr. Jorge Basurto, *El proletariado industrial en México (1850-1930)*, México, UNAM, 1975.

<sup>2</sup> Es bien conocida la anécdota de aquel que preguntó si Terrazas era de Chihuahua, a lo que el propio aludido contestó: "No, Chihuahua es de Terrazas."

<sup>3</sup> Rodolfo Stavenhagen, "Aspectos Sociales de la Estructura Agraria en México", *Neolatifundismo y explotación*, México, Editorial Nuestro Tiempo, 1968, p. 14.

La élite económica —obvio es decirlo— se esfuerza en mantener el sistema existente, para lo cual considera indispensable el fortalecimiento del aparato gubernamental con su poder represivo. Al crear y sostener con fondos propios otros cuerpos represivos para su uso particular, los terratenientes, por un lado, aprueban los métodos fuertes del dictador y, por otro, refuerzan los instrumentos federales de represión. Pero al mismo tiempo el modo de producción y las relaciones sociales que de él se derivan, junto con el paulatino fortalecimiento de una burguesía industrial a la que no conviene ya tal modelo de desarrollo semifeudal, constituyen el germen de su propia destrucción y el estallido de la revolución de 1910, el signo más visible de esa descomposición.

Sabido es que los primeros gobiernos revolucionarios no tocaron la cuestión agraria; Madero, porque intentaba que se creara la pequeña propiedad agrícola sin tocar las grandes propiedades, cosa imposible por la estructura de la tenencia de la tierra existente en ese momento; Venustiano Carranza, porque —aun cuando dicta alguna ley al fragor de la lucha contra la dictadura restaurada, al percatarse del alcance que tal disposición podía llegar a tener de aplicarse en debida forma— da instrucciones para frenar lo que él mismo, tal vez sin suficiente reflexión, había ordenado.<sup>4</sup> Los primeros pasos para destruir el antiguo orden no van, pues, demasiado lejos.

Con el asesinato de Carranza en 1920, la dirección de la revolución recae en manos del grupo de Sonora, tres generales provenientes de las clases medias norteañas que nunca se deciden a llevar adelante la destrucción de la élite terrateniente. De 1910 a 1934, la propiedad territorial permanece prácticamente intacta; las escasas afectaciones no llegan a tocar a fondo la estructura del sistema agrario. La oligarquía porfirista, por el contrario, queda de hecho desmembrada durante los años de guerra civil.

Entre tanto, a partir del gobierno del general Obregón se reanuda el interrumpido proceso de industrialización del país, alentado por la ideología desarrollista de sus gobernantes. Pero los grupos industriales no tienen un mercado suficiente para sus productos: gran parte de la población —principalmente el sector campesino sin tierra que constituye la mayoría— sigue estando fuera de la economía de mercado, y a pesar de

ello el proceso de reforma agraria se dio oficialmente por terminado, lo cual equivalía a decir que se consideraba que la revolución de 1910 había cumplido con su misión. Nos referimos, por supuesto, a la actitud adoptada por Plutarco Elías Calles frente al problema agrario, que la tomamos como el acta de consumación —o de defunción, como dicen los pesimistas— del proceso revolucionario, puesto que Calles es en ese momento su jefe máximo y la cuestión de la tierra se convirtió, en los años de lucha armada, en el motor del fenómeno.

Sin embargo, el hombre propone y los ciclos económicos del sistema capitalista disponen. En efecto, a la inactividad de los gobiernos sucesivos viene a sumarse, en 1929, la gran depresión que se inicia en los Estados Unidos y se propaga al resto del mundo capitalista, afectando en gran medida a las economías latinoamericanas, que se encuentran de pronto con su principal mercado de materias primas cerrado y con los precios de éstas estrepitosamente desplomados. En el caso particular de México la crisis repercute en el sector agrario por partida doble, pues además del cierre de los mercados internacionales —principalmente el del país del norte, hacia donde se exporta la mayor parte de los productos agrícolas—, se da una correlativa contracción de la demanda interna por el desempleo que se agudiza, todo lo cual origina una pérdida de interés de los propietarios agrícolas en la tierra: económicamente se debilitan.

Por otro lado, como contrapartida, la propia crisis priva al país de productos manufacturados provenientes del mercado norteamericano, lo cual constituye una gran oportunidad para que los empresarios industriales entren a satisfacer, aun cuando sea parcialmente por el momento, las necesidades del mercado interno que, raquítico por efectos de la crisis, ofrece grandes perspectivas de ampliarse y fortalecerse. Hasta antes de la crisis, gran parte de la industria trabajaba por debajo de su capacidad instalada por dos razones fundamentalmente, por la competencia internacional y la estrechez del mercado. Al sobrevenir la crisis y presentarse las condiciones descritas esos mismos industriales comienzan a producir en mayor escala mediante pequeñas inversiones que eran estrictamente necesarias y, en muchos casos, llegan a aumentar su producción sin capital adicional. En el curso de los cinco primeros años a partir del estallido de la crisis, numerosas fábricas lograron elevar hasta en un 50 por ciento el rendimiento de la mano de obra, gracias a algunas modificaciones y

<sup>4</sup> Magdalena Mondragón, *Cuando la revolución se cortó las alas*, México, Costa-Amic, 1966, p. 273.

adaptaciones de la maquinaria,<sup>5</sup> aumentándose la oferta a costa de una intensificación de la tasa de explotación del trabajador asalariado.

Vuelve a presentarse, pues, la contradicción entre la existencia de un sector terrateniente, en gran parte ineficaz, y la oportunidad de desarrollar una burguesía nacional; en esta ocasión el conflicto es más agudo por los efectos de la reciente crisis. Pero, por otra parte, las estructuras políticas no son propicias a un cambio que signifique la destrucción de la gran propiedad agrícola por más que se declare la intención de llevar adelante el proyecto de desarrollo industrial del país. El general Calles no alcanza a ver la imposibilidad de lograr lo segundo sin antes destruir el cuello de botella que significaban las extensas propiedades improductivas en el campo; como hemos dicho, el hombre fuerte de México había declarado en repetidas ocasiones que el proceso de reforma agraria había terminado, y agregaba además que, de todos modos, las reparticiones hechas hasta entonces habían sido más bien perjudiciales para la economía nacional.

Toda la problemática originada por la inactividad de los gobiernos revolucionarios hasta esa época y la crisis de 1929 fue entendida por Lázaro Cárdenas, quien en su programa de gobierno presentó alternativas y soluciones. Para llevarlas a cabo era indispensable efectuar, por un lado, una reforma agraria lo suficientemente profunda como para destruir el poder de los terratenientes y, por otro, un fortalecimiento del poder de negociación de los obreros. En los dos casos era necesario afectar intereses tanto nacionales como extranjeros. Para cumplir con su programa de desarrollo económico, el general Cárdenas debía, pues, de enfrentarse a la élite terrateniente nacional y extranjera, a un sector de la burguesía mexicana y a todo el capital industrial extranjero, en su mayor parte norteamericano. Y todo ello era fatalmente necesario para sentar las bases de un desarrollo económico que pudiera satisfacer los proyectos de una burguesía nacional que trataba de fortalecerse a expensas de los sectores anteriores.

Ahora bien, la situación interna del país no permite que tales reformas se lleven a cabo dentro de los marcos políticos e institucionales existentes, dominados por una élite muy conservadora, una oligarquía aún no consolidada totalmente, pero ya comprometida con los intereses que eventualmente serían dañados. Por ello, es que la única manera de llevar a cabo el programa re-

<sup>5</sup> Moisés T. de la Peña, "Los Salarios en la Industria Textil", *El Trimestre Económico*, vol. 1, núm. 2, p. 171.

formista era buscando el apoyo de aquellos que en un primer momento saldrían beneficiados: los campesinos y los obreros.

Los campesinos han sido, antes y durante la revolución, fuerzas más o menos explosivas y fácilmente subleables; la pobreza que los agobia desde siempre y las relaciones paternal-autoritarias que privan en el campo los conduce a ello. Las incumplidas promesas de los primeros gobiernos revolucionarios los vuelven a poner en movimiento y se lanzan a apoyar un movimiento reaccionario, la rebelión cristera, al que modifican en su esencia. En cuanto a los obreros, también insatisfechos y víctimas en numerosos casos de relaciones patronales semejantes a las existentes durante el porfiriato, han logrado para entonces deshacerse, por lo menos, del encuadramiento dentro de la gran organización oficial de los veintes —la CROM—, como resultado de la misma crisis interna del Estado oligárquico; ello les permite emprender acciones reivindicativas que repercuten en presiones sobre el gobierno. Son las primeras expresiones de la explosión huelguística que tuvo lugar entre 1933 y 1938.

El programa cardenista contempla todas estas cuestiones e intenta resolverlas dando a su régimen una orientación populista. Así, emprende en el campo una transformación de las estructuras heredadas del porfiriato, para lo cual se hace una gran movilización campesina apoyando estas reformas; se encamina a esas masas a luchar contra el antiguo dueño de la tierra que, no confiando en absoluto en los bonos de la deuda agraria, se oponía a ser confiscado.<sup>6</sup> En este sentido, la movilización campesina del cardenismo significó lo que provisionalmente llamaremos —siguiendo a otros autores latinoamericanos—, una *alianza* contra la oligarquía terrateniente.

Por otro lado, a los obreros se les alentó a formar y/o fortalecer sus organizaciones con miras, como ya se ha dicho, a librar una batalla en el terreno de las reivindicaciones económicas con el declarado objeto de activar la industrialización; esto es, para impulsar la inversión industrial vía activación de la demanda interna. El proyecto no pudo llevarse a cabo sin tropiezos: una fracción de la burguesía, la más conservadora —tal vez por ser la más antigua—, partidaria o ligada a los

<sup>6</sup> Nadie creía, por supuesto, en los bonos de la deuda agraria y tenían toda la razón. Su devaluación y práctica perdida de todo valor significó que la reforma agraria mexicana se hizo gratuitamente salvo por lo que se refiere a la indemnización concedida a los propietarios extranjeros.

capitalistas extranjeros, se opuso terminantemente a él. No se debe olvidar que el propio Calles tenía intereses en compañías norteamericanas. Otra fracción, la llamada burguesía nacionalista —que poco después se organizó en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación—, era partidaria de realizarlo, pero con cautela: se encontraba ante la oportunidad de apropiarse y explotar ese mercado interno, disputándolo a los capitalistas extranjeros y mexicanos que lo detenían, y no estaba dispuesta a desaprovecharla. Por lo tanto, acepta la alianza con el gobierno y se proclama a favor de un desarrollo nacionalista como el preconizado por Cárdenas, aceptando también, de momento, la inclusión de las masas obreras en el proyecto.

Así, las masas campesinas y obreras fueron conducidas a luchar, como dice Octavio Ianni, contra los enemigos de su enemigo: las oligarquías latifundistas y el imperialismo con sus aliados internos.<sup>7</sup>

Se trata también de remodelar los patrones de dependencia que habían existido desde hacía tiempo respecto del imperialismo norteamericano; esa dependencia había significado para el gobierno del general Obregón la capitulación en algunos de los puntos más importantes del programa inicial de la revolución, que se plasmó en los tratados de Bucareli, incluyendo la imposibilidad de llevar a cabo expropiaciones de tierras pertenecientes a extranjeros, como no fuera previa indemnización en efectivo. Posteriormente, el gobierno de Calles se vio obligado a ceder a las presiones norteamericanas en lo relativo al petróleo, permitiendo de hecho que las compañías que lo explotaban se sustrajeran a lo dispuesto en el artículo 27 constitucional. Por lo demás, conforme avanzó su periodo de gobierno, Calles dio muestras de una docilidad cada vez mayor, cediendo a otras pretensiones norteamericanas hechas por conducto del embajador Morrow.

Lo mismo podía suceder al nuevo gobierno si no se sacudía un poco esa influencia, en cuyo caso todo el proyecto desarrollista se vendría abajo, puesto que la intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de México impediría la realización de puntos a los que el gobierno daba la mayor importancia. La mejor demostración la tenía el gobierno en lo que sucedió en la cuestión agraria. En efecto, en cuanto se dio comienzo al programa de expropiación de tierras, los norteamericanos ejercieron presiones exigiendo el

<sup>7</sup> Octavio Ianni, "Populismo y Relaciones de Clase", *Populismo y contradicciones de clase en Latinoamérica*, México, ERA, 1973, p. 118.

cumplimiento de la norma de pago "justo" (es decir, el valor comercial y no el declarado para efectos fiscales, que suele ser muchísimo menor), de inmediato, al contado y en dólares, principio que —según ellos— rige las relaciones entre naciones. Para salvar ese obstáculo, y tal vez con objeto de que los terratenientes nacionales no se sintieran apoyados por la actitud norteamericana, el gobierno optó por dedicar un millón de dólares para compensar a los extranjeros perjudicados y dirigir su acción fundamentalmente sobre los propietarios mexicanos. En la precipitación —cabe decirse— no sólo se afectó a los grandes terratenientes, sino que se dio libertad a los líderes agraristas para tomar incluso pequeñas y medianas propiedades que legalmente no eran afectables, sin que sus dueños pudieran acudir a recurso alguno, puesto que no se les concedía el derecho de amparo ni de interpelación.

Por lo que a la cuestión industrial respecta, la política cardenista aparecía también demasiado radical a los ojos del capital norteamericano, que temía que el país se inclinara hacia el socialismo. Así interpretaba el apoyo que se daba a las organizaciones obreras en sus disputas con el capital, tanto nacional como extranjero, y, en consecuencia, se oponía a tal proceder, estorbando los planes presidenciales de desarrollo.

Los resultados de esa política no se dejaron esperar: miles de familias campesinas son lanzadas a la economía de mercado, lo cual influye en el proceso, aun cuando su poder de compra sea bastante bajo y los salarios industriales logran ganar la carrera al fenómeno inflacionista que adquiere proporciones importantes. Pero al mismo tiempo se procura apoyar financieramente a los industriales, de manera que los créditos concedidos a largo plazo por las instituciones bancarias aumentan de 60 millones de pesos en 1935 a 246 millones en 1940,<sup>8</sup> con lo cual el número de establecimientos industriales captados por el censo respectivo aumenta considerablemente, de 7 600 a 13 500, así como el número de obreros ocupados que pasa de 284 000 en 1935 a 341 000 en 1940.<sup>9</sup> Es necesario aclarar que, conforme a los datos de los censos industriales, aumentó sobre todo el número de pequeñas y medianas industrias, que eran precisamente las pertenecientes a los propietarios nacionales.

<sup>8</sup> Dirección General de Estadística, *Anuarios Estadísticos*, 1939 y 1941.

<sup>9</sup> Secretaría de Industria y Comercio, *Censos industriales*, respectivos.

Ahora bien, el enfrentamiento inminente que implicaba el programa cardenista con el imperialismo norteamericano —y que fue utilizado para encender el nacionalismo popular—, era a la vez, paradójicamente, un obstáculo para llevar adelante la industrialización del país.

Una vez realizada la nacionalización del petróleo, se advierte la imposibilidad de un desarrollo nacional independiente por falta de capitales propios y tecnología; la mano de obra disponible es de baja calificación o bien no tiene ninguna, debido a que gran parte de ella está constituida por las masas rurales que emigran a las ciudades en busca de empleo. Entonces tiene que recurrirse al extranjero, concretamente a los Estados Unidos, para procurarse esos elementos. A finales del régimen cardenista, el país vecino decide levantar en gran parte las restricciones impuestas a México con motivo de las expropiaciones de tierras a ciudadanos norteamericanos y de la expropiación petrolera, dado que, como hemos dicho, Cárdenas, por su parte, accedió a pagar las afectaciones agrarias en los términos exigidos, y en cuanto al petróleo, los intereses tocados eran principalmente británicos.

La idea de Cárdenas era aceptar sólo préstamos de gobierno a gobierno que no comprometieran la independencia de México y, en el terreno de la inversión extranjera directa, hacer aceptar al gobierno norteamericano la tesis de que, por el solo hecho de realizarse en suelo mexicano, tales inversiones estaban sujetas a las leyes de este país, lo cual fue expresado en carta entregada a su sucesor. Tal condición no fue ni es aceptada por el país vecino, puesto que eso equivaldría a renunciar a su condición de potencia hegemónica; pero ello no fue necesario en adelante, ya que los sucesivos gobiernos mexicanos no insistieron en el punto.

Hemos descrito, pues, los principales rasgos del nacionalismo y del antimperialismo cardenista que son, por lo demás, elementos que no dejan de estar presentes en los regímenes populistas de América Latina. Podríamos resumirlos diciendo que se trataba de crear las condiciones internas más favorables para el desarrollo del país tomando en cuenta, por un lado, que ese desarrollo debía ser benéfico para el mismo —sobrentendiéndose que estaba constituido no sólo por las distintas fracciones de la burguesía, sino también por las grandes masas obreras, campesinas y los sectores medios—; por otra parte, el nacionalismo significaba el aprovechamiento de los recursos naturales nacionales en su propio beneficio. Y aun cuando es bastante difícil definir

el nacionalismo en general, puesto que todo mundo se precia de practicarlo y cada quien lo hace a su manera, creemos que esos dos elementos son condiciones *sine qua non* de una política que pretenda llevar honestamente ese título.

Podemos, pues, llegar a la conclusión de que, en cierta manera, nacionalismo y antimperialismo no son sino las dos caras de una misma moneda; esto es, que no puede hablarse de uno si no se está practicando el otro.

En los años siguientes se produjeron en el país cambios cuantitativos que acarrearón transformaciones cualitativas en el aspecto que nos ocupa. En efecto, como ya hemos señalado, durante el sexenio cardenista se favorece el establecimiento de nuevas industrias, se propician cambios importantes en el agro y se aumenta el poder adquisitivo de los asalariados, todo lo cual redundó en un crecimiento más dinámico de la economía nacional y, puesto que la estructura capitalista del país no había sido modificada, la principal beneficiaria del cambio fue la burguesía misma; en este caso la fracción nacionalista, la cual para entonces ya consideraba que el experimento cardenista había cumplido su cometido y por lo tanto debía llegar a su fin; en consecuencia, no apoyó la posibilidad de que el siguiente presidente pudiera ser un político con las mismas características que Cárdenas. Es éste un primer punto de coincidencia entre esta fracción de la burguesía a la que hemos llamado nacionalista, porque apoyó a Cárdenas en su momento, y las fracciones nacional proimperial y extranjera que no sólo no apoyaron, sino que combatieron denodadamente la idea de tal continuación.

Las tres fracciones burguesas, con el apoyo de importantes sectores del ejército, hacen triunfar su proyecto de cambiar el rumbo seguido en los últimos 6 años y sientan así las bases para su propio fortalecimiento y el de una nueva oligarquía propiciada por ellas.

El capital extranjero, apoyado por la fracción proimperial de la burguesía mexicana, triunfa también al imponer sus puntos de vista sobre la cuestión de la inversión extranjera en el país. Haciendo valer el hecho real de la falta de capitales en el país, pero olvidándose de las recomendaciones de Cárdenas al respecto, se abren las puertas al capital norteamericano en condiciones que implicaban el traspaso de una parte de la soberanía nacional a favor de los dueños de ese capital que, por lo demás, se encontraban ampliamente protegidos y respaldados por su propio gobierno que no re-

conoce más ley que la propia. Al mismo tiempo, se trata de disfrazar el mal paso dado mediante la fórmula de exigir formalmente, aunque no de hecho, la participación de un mínimo del 51 por ciento de capital mexicano; la asociación de capitales extranjeros con nacionales resultó ficticia gracias al oportuno funcionamiento de uno de los mecanismos normales más eficaces del capitalismo, la corrupción, tanto a nivel oficial como particular: se corrompió al aparato gubernamental para que se permitiera pasar por alto tal disposición y se corrompió a ciudadanos particulares para que consintieran que sus nombres aparecieran como propietarios, obviamente fingidos, de ese 51 por ciento. Cabe señalar, por otro lado, que el solo hecho de promulgar tal disposición, es la mejor prueba de que la razón asistía a Cárdenas cuando hacía las advertencias de que hemos hablado.

Así, la economía mexicana ha dependido cada vez en mayor medida del extranjero, en especial de los Estados Unidos o, mejor dicho ha pasado paulatinamente a manos del capital extranjero, concretamente del norteamericano. No sólo se ha tratado de la creación de nuevas empresas con capital foráneo, sino de la compra de las ya existentes por esos mismos capitalistas del exterior en condiciones bastante favorables para ellos: prácticas desleales para arruinar a la competencia nacional y consecuentemente creación de situaciones de monopolio, exportación irrestricta de las fabulosas ganancias así obtenidas, etcétera. Además, los capitalistas norteamericanos, con los privilegios mencionados, han llevado a cabo una explotación irracional, la mayor parte de las veces, de los recursos naturales. Tal política llega a los límites de lo inconcebible con la decisión de Miguel Alemán de entregar nuevamente el subsuelo de la nación para su explotación a las empresas petroleras, que durante mucho tiempo gozaron de tal concesión; esto sólo pudo ser evitado mediante una decidida intervención entre bambalinas de algunos cardenistas. En una palabra, a partir de 1941 los gobiernos mexicanos abandonan en definitiva el tinte antimperialista que se le había dado en los treinta.<sup>10</sup>

Pero si se pudo desterrar fácilmente el antimperialismo aduciendo el peligro comunista que fue bien manejado, no podía hacerse otro tanto con el nacionalismo. Por lo tanto, no se abandonó en ningún momento la retórica nacionalista; sólo se cambió su contenido.

<sup>10</sup> Incluso la palabra "imperialismo" fue desterrada del lenguaje oficial y sólo ha sido rescatada recientemente por Luis Echeverría.

El nacionalismo cardenista, del cual hemos querido hacer una definición líneas arriba, era esencialmente de izquierda, si bien bastante moderado, puesto que nunca se trató de descartar la existencia de la burguesía ni de privarla de sus "razonables ganancias", como sus propios miembros suelen llamar al conjunto de sus beneficios. Pero aún así, ese nacionalismo era inaceptable, tanto para la burguesía que ejercía presiones sobre el gobierno para que fuese abandonado, como para éste que no resistía a tales presiones por estar él mismo inclinado en ese sentido.

Conforme a lo que hemos dicho, resulta imposible mantener sólo uno de los dos aspectos de la cuestión, es decir, declararse nacionalista y ser más o menos proimperialista, como ha sido el caso de México a partir de 1941. Esta aparente contradicción tiene su explicación evidentemente en el carácter del nacionalismo que se ha practicado desde entonces: el nacionalismo objetivo de Cárdenas ha sido sustituido por uno subjetivo; esto es, se apela a elementos sentimentales, característica de los nacionalismos de derecha. Y cuanto más se desliza hacia la derecha, tanto más se recurre a ellos y tanto más absurdos resultan los símbolos de ese nacionalismo: un boxeador mexicano que triunfa sobre uno extranjero; la política de obras —que aspiran a ser grandiosas y sólo llegan a ser grandotas— para que los mexicanos las muestren orgullosos al visitante extranjero; la celebración en el país de eventos internacionales supuestamente deportivos y en realidad enajenantes; en síntesis, el nacionalismo que se inculca a las masas consiste simple y llanamente en un despolitizado amor a su país, en el irracional "como México no hay dos"; el nacionalismo ha devenido pura y simplemente *chauvinismo*.

Este tipo de nacionalismo —es importante señalarlo—, es ampliamente tolerado, sostenido y alentado por la burguesía, porque en nada la compromete y en nada molesta a sus intereses.

En cuanto al nacionalismo de aquella fracción burguesa que apoyaba a Cárdenas, lo único que puede decirse es que sufrió igual transformación. Las reformas de los treinta y, posteriormente, la coyuntura internacional originada por la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Corea, le fueron muy favorables. Poco a poco, pudo equipararse a las otras dos fracciones que resultaron beneficiadas por igual con el correr de los años, y a medida que aumentaba su capital y su poder cambiaba su conciencia social, operándose un proceso de identificación gradual, tanto con la burguesía

nacional proimperial como con la extranjera. Los intereses de las tres fracciones se confunden, pues en este último estadio del desarrollo mexicano y sus fuerzas se unen en la acción frente al gobierno, con quien están a fin de cuentas plenamente identificadas, y frente a los trabajadores, de quienes se han alejado. Llegamos a la conclusión de que la noción de nacionalismo, e incluso la de patria, son muy peculiares cuando las maneja la burguesía, pues varían en función de sus intereses, o, para decirlo con mayor claridad, la patria y el amor hacia ella no son otra cosa que sus intereses y sus cuidados en defenderlos e incrementarlos a como dé lugar.

Por otro lado, en las nuevas condiciones no interesa ya la alianza con las masas. Las relaciones de producción netamente capitalistas, sin los antiguos tintes populistas, se han presentado ya y han tomado por sorpresa al proletariado y a los campesinos que, atados a las organizaciones oficiales, no se encuentran en condiciones de luchar fuera de la tutela del gobierno, el cual, a su vez, adquiere también las características propias del Estado burgués, representante de las clases dominantes y defensor de sus intereses. La movilización de masas se había llevado a cabo con la intención de no proporcionar una politización adecuada; se había insistido en que su lucha sólo perseguía reivindicaciones económicas, ya que políticamente —al menos eso se les hacía creer— se encontraban en el poder al estar en alianza con el gobierno y, en el caso de los trabajadores industriales, con la fracción nacionalista de la burguesía nacional. Se les habían imbuido exclusivamente las ilusiones de un consumo creciente y las posibilidades de ascenso social, tan características del liberalismo, y se les aconsejaba contentarse con ello. Pero el consumo creciente, real en la época de Cárdenas, desapareció con posterioridad al no tener respaldo para su acción reivindicativa, sino, por el contrario, represión, y su participación en el poder se desvaneció también debido a que sus líderes, interesadamente, cometieron el error de continuar en la antigua alianza alejándose de las masas. Vemos pues cómo la supuesta alianza no era en realidad otra cosa que una manipulación en apoyo del régimen, lo cual supone a la vez un rígido control de manera que sus movimientos y peticiones no desbordaran los límites del reformismo cardenista.

En estas circunstancias, una vez que era evidente que no se cumplirían las promesas de consumo creciente, algunos sectores proletarios pretendieron iniciar una política independentista respecto del Estado, lo cual los

lleva a un enfrentamiento con éste y con el capital. La armonía de clases preconizada se ha transformado en lucha de los sectores más conscientes que, dicho sea de paso, no son aquellos que se encuentran en muy mala situación económica, sino los que tienen un pasado obrero: ferrocarrileros, mineros, etcétera.

A las peticiones puramente económicas que tales sectores plantean, se les responde con la violencia; pero al mismo tiempo se esgrimen argumentos pseudo-nacionalistas en los que el elemento "patria" y los perjuicios que la acción proletaria le acarrea son predominantes. Es decir, puesto que no existe ya el enemigo extranjero original —ahora es su aliado—, se recurre al fetichismo patriótico que tanto la burguesía como el gobierno han cuidado bien de cultivar. Esto prueba la aseveración anterior, en el sentido de que para la burguesía existe una identificación entre sus propios intereses y la patria, puesto que los planteamientos de reivindicaciones económicas merman necesariamente; esto es, perjudican, así sea momentáneamente, tales intereses, lo cual, por lo demás, no podía ser de otra manera puesto que ése es su modo de presionar.

No obstante, quizá la parte más importante del problema sea la cuestión de la supervivencia del sistema oligárquico, ya que de las concesiones económicas al trabajador, la burguesía se repone con creces y de inmediato a través del alza de precios. En efecto, como en tales casos suele suceder que a las reivindicaciones económicas sigan las de tipo político; es decir, la exigencia popular de que no se interfiera en sus deseos de independizarse de los organismos oficiales (CTM, CNC, PRI, etcétera), la acusación siguiente es en el sentido de que las masas están traicionando los postulados de la revolución mexicana. Finalmente, como el nacionalismo exige la presencia de un enemigo, y dado que el imperialismo norteamericano ya no lo es, se ha dado beligerancia a otro para sustituirlo: el comunismo.

El cumplimiento de estas tareas implica forzosamente un entendimiento entre burguesía y gobierno y, en ciertos momentos, se deja ver bien la influencia —si no es que el dominio—, de la primera sobre el segundo. Los contactos entre ambos, como en tiempos de Porfirio Díaz entre los terratenientes y la oligarquía, son en todos los niveles. No obstante, el poder de la burguesía moderna es más grande por ser más rica y su acción más enérgica por tener, en consecuencia, más que defender. Por esa razón exige al gobierno mano dura contra los opositores al sistema y éste la complace. Por la misma razón, la burguesía aprueba la profunda co-

rrupción del sistema mexicano, que es bastante mayor que la que generalmente se permite en el sistema capitalista en general, del cual, repetimos, la corrupción es un elemento indispensable. Pero además, la burguesía aprueba esa corrupción porque se sirve de ella para sus propósitos; esto es, para acelerar el proceso de acumulación de capital. Asimismo, aprueba el aparato policiaco estatal —más eficiente y feroz que la tristemente célebre acordada porfiriana— porque, en primer lugar, no va dirigido contra ella y, en segundo, porque puede ser —y de hecho es— útil en la represión de la oposición.

Tenemos, pues, en conclusión, que los elementos que hicieron insoportable la dictadura porfiriana se han vuelto a presentar, ahora en proporciones mayores debido al crecimiento que ha experimentado el país desde el estallido de la revolución de 1910. La élite terrate-

niente ha sido sustituida por una industrial, bancaria y comercial proporcionalmente más pequeña que su antecesora, pero más agresiva que ésta; la oligarquía científica ha sido sustituida por otra que gusta auto-denominarse “revolucionaria”, bastante más corrupta que su antecesora porfiriana; los rurales, la acordada y demás instrumentos represivos de don Porfirio han sido sustituidos por cerca de un centenar de cuerpos policiacos más sanguinarios y despiadados que sus antecesores. Y esta situación ha ido tan lejos que los intentos por introducir alguna modificación durante el régimen de Luis Echeverría han fracasado, unos en mayor medida que otros, debido a la decidida oposición que presentan todos los sectores que en el pasado se han beneficiado del *statu quo* y que constituyen el producto del proceso revolucionario: burguesía, oligarquía y líderes al servicio de ambas.

